

INSERCIÓN SOLICITADA  
POR EL SEÑOR DIPUTADO BALADRON

**Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre reforma laboral**

El proyecto de ley de reforma laboral, con media sanción del Senado de la Nación, nos merece serios reparos constitucionales, que fundamentan la oposición en general y en particular del justicialismo.

Nuevamente observamos con preocupación que el gobierno de la Alianza no da cumplimiento a la Constitución Nacional, en su afán por promover la hegemonía estatal sobre los actores sociales.

En este caso el perjudicado es el sindicalismo y todo el universo que representa, es decir, toda la población económicamente activa de nuestro país.

El proyecto de ley en tratamiento resulta inconstitucional en numerosos aspectos.

En primer término, el título VI (artículos 19 a 31 del proyecto de ley) avasalla expresas facultades provinciales, otorgándole poderes al Estado nacional que las provincias no le han delegado.

Se pretende que el Ministerio de Trabajo sea la "autoridad central" del Sistema Integrado de Inspección del Trabajo y la Seguridad Social.

Se intenta un centralismo en el ejercicio de la policía del trabajo, contrariando la práctica del último período de gobierno que consistió en otorgar a los ministerios, secretarías y direcciones de trabajo provinciales el contralor de los empleadores en el cumplimiento de la legislación laboral.

La reforma es lesiva de la competencia no delegada de las provincias.

Asimismo se priva al Consejo Federal del Trabajo, sin razón jurídicamente válida, las facultades conferidas por la ley nacional N° 25.512, de reciente sanción.

En la provincia de La Pampa el poder de policía del trabajo es ejercido por la Dirección General de Relaciones Laborales.

El Estado nacional no puede constitucionalmente arrogarse tales facultades, no delegadas a tenor del artículo 121 de la Constitución Nacional, lo que determina claramente la inconstitucionalidad del proyecto de ley en tratamiento.

Asimismo, en el supuesto de que se sancione la norma en cuestión, desde ya adelantamos que la misma sería susceptible de ser cuestionada por vía del amparo previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional, por cuanto causa un serio e irreparable perjuicio a los Estados provinciales.

El perjuicio sería actual e inminente ocasionando una lesión, restricción, alteración y supresión de expresas garantías constitucionales de los estados provinciales, lo que habilitaría a solicitar judicialmente la declaración de inconstitucionalidad por la vía del amparo, dentro del plazo de quince días de sancionado el proyecto de ley.

En segundo lugar, se regula la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo de tres formas distintas, lo que controvierte la igualdad ante la ley prevista en el artículo 16 de la Constitución Nacional.

Reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha interpretado que la garantía de igualdad no es aritmética ni absoluta, sentando el principio rector de que "la ley debe ser igual en igualdad de circunstancias".

Los convenios colectivos de trabajo vigentes al momento de la eventual sanción de la nueva reforma laboral son objetivamente iguales. Todos regu-

lan condiciones y medio ambiente de trabajo. No existe por lo tanto una razón válida para el tratamiento desigual de los distintos convenios colectivos.

El proyecto de ley establece un régimen general de ultraactividad y dos regímenes especiales transitorios, sustancialmente diferentes.

El régimen general regulado en la modificación del artículo 6° de la ley 14.250, es que las partes pueden establecer distintas fechas de vencimiento de las cláusulas de un convenio e incluso otorgarle ultraactividad. Si no ejercieren esta facultad ni hubiere entrado a regir un nuevo convenio las cláusulas del convenio colectivo perderán vigencia en un plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha en que una de las partes denunciare formalmente el convenio.

El régimen de especial para los convenios colectivos que actualmente se encontraran vigentes por ultraactividad y que fueran anteriores al año 1988, esto es, anteriores a la sanción de la Ley 23.545, es el siguiente.

Su vigencia se prorroga por el plazo de dos (2) años.

Dicho plazo de vigencia se computa a partir de la resolución del Ministerio de Trabajo que con referencia específica a cada uno de los convenios convoque a renegociar el mismo.

Vencido el plazo de dos años, en caso de que no haya acuerdo, el sindicato o ambas partes pueden solicitar el arbitraje del Ministerio de Trabajo. Si no lo solicitan las cláusulas que regulan condiciones laborales, salariales y contribuciones patronales perderán vigencia.

El proyecto expresamente contempla que "el resto de las cláusulas convencionales que no hubieren sido acordadas se mantendrán vigentes hasta tanto se acuerde su modificación".

Como conclusión de este régimen de excepción, resulta que las cláusulas que regulan los aportes personales de los trabajadores a los sindicatos, para estos convenios anteriores al año 1988, se mantienen ultraactivas, y hasta que se modifiquen las mismas, esto es, no caducan.

Se preservan, por lo tanto, los recursos sindicales que prevén estos convenios, formados por aportes personales de los trabajadores a la organización sindical que suscribió el convenio colectivo en su representación.

El tercer régimen es el que contempla la situación de los convenios actualmente vigentes por ultraactividad posteriores a la sanción de la ley 23.545, esto es, posteriores a 1988.

Respecto de los mismos el régimen legal es el establecido en el artículo 29 del proyecto.

El plazo de vigencia adicional de dichos convenios es de dos (2) años, pero contado a partir de su denuncia por cualquiera de las partes, esto es, por el sindicato o la cámara empresaria.

Vencido dicho plazo sin acuerdo, el Ministerio de Trabajo invitará a las partes para un arbitraje voluntario.

Si las partes aceptaran someterse al arbitraje propuesto, las cláusulas del convenio se mantendrán vigentes hasta tanto entre en vigencia el laudo que se dicte como producto de tal arbitraje.

Si una de las partes no aceptare el arbitraje voluntario, todas las cláusulas del convenio perderán vigencia, incluso la referida a los aportes personales de los trabajadores.

En conclusión, la reforma discrimina entre sindicatos con convenios anteriores y posteriores a la sanción de la ley 23.545, otorgando a los anteriores la preservación de recursos económicos de la organización sindical, lo que no permite a los otros.

Esta distinción, que perjudica a los sindicatos con convenios colectivos de trabajo posteriores a la sanción de la ley 23.545, es claramente contraria a la garantía de igualdad y debe por lo tanto rechazarse.

Sólo se entiende dicho privilegio legal a partir de recordar la negociación con ciertos y determinados sectores sindicales, efectuada por el Ministerio de Trabajo, en su afán de lograr a cualquier costo la sanción de esta ley.

El fin no justifica los medios. La Justicia es el horizonte del accionar estatal en procura del bien común.

Una norma que carece de razón de justicia es irrazonable y por lo tanto inconstitucional.

Pero más aún: dicha distinción es absolutamente inédita en el Derecho Social Argentino.

Nunca ha existido una ley dictada en el ámbito del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que tratara una misma situación de tres maneras distintas.

Es claramente una aberración jurídica, que sin duda generará litigiosidad judicial e inseguridad jurídica, lo que incrementará el riesgo país.

Por último, autorizar convenios colectivos a la baja, *in peius*, de los derechos de los trabajadores controvierte la ley sindical y la esencia del sindicalismo argentino.

Se violenta el principio de irrenunciabilidad, que emana del principio protectorio del mundo del trabajo, expresamente consagrado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Los sindicatos, por medio de los convenios colectivos, no pueden renunciar intereses colectivos ni individuales de los trabajadores, so pena de incurrir en conducta arbitraria e inconstitucional.

La ley 23.551, en su artículo 31, establece la misión sindical: defender y representar los intereses individuales y colectivos de los trabajadores.

No pueden, por lo tanto, renunciar o disponer de dichos derechos de sus representados y la ley que lo autorizara resultaría inconstitucional.

El trabajador, al que se le redijeran derechos por un convenio colectivo a la baja puede válidamente accionar judicialmente a los efectos de que se decrete la inconstitucionalidad de la ley y del convenio colectivo *in peius*.

Nuevamente vemos que el proyecto que se pretende sancionar sólo generará mayor litigiosidad.

La Constitución Nacional no puede ser avasallada por una norma de inferior jerarquía.

Los legisladores de la Nación no deberíamos contemplar alegremente cómo se avasallan los intereses individuales y colectivos de los trabajadores y de las organizaciones sindicales.

Este proyecto, de sancionarse, sólo generará mayor litigiosidad e inseguridad jurídica. De ninguna manera contribuirá decididamente a producir nuevos empleos.

Al observar cómo se pretende restringir los derechos sociales recordamos aquella siniestra y dura imagen que Ernesto de la Cárcova expresó en el cuadro *Sin pan y sin trabajo*, que engalana una de las salas del Museo de Bellas Artes.

No permitamos que esta situación de brutal desamparo nuevamente se repita.

Por todo lo expuesto solicitamos a los señores diputados el rechazo, en general y en particular, del proyecto de ley de reforma laboral.

## 2

### INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA CAMAÑO

#### **Ampliación de la exposición de la señora diputada acerca del proyecto de ley sobre reforma laboral**

La República Argentina padece en el plano laboral y en el de la seguridad social cuatro situaciones críticas: la desocupación, la subocupación, las remuneraciones magras y las jubilaciones miserables.

No es ningún consuelo que la situación se repita en la mayoría de los países del mundo, y no es el momento de buscar culpables internos o externos, porque cada uno de nosotros tendrá a los culpables según sus convicciones o su formación ideológica.

Lo que debemos buscar es cómo superar la crisis global que nos aqueja en estas materias.

Estoy convencida de que una ley, cualesquiera fueren las buenas intenciones con que se dicte o los instrumentos a que recurra, si no cuenta con una base realista, queda en una mera expresión de deseos y se convierte en letra muerta.

Hemos sostenido que para salir de la crisis es necesario que el gobierno establezca las condiciones para desarrollar el mercado interno, se abonen salarios y jubilaciones dignas para motorizar el consumo, se impulse la producción para competir y exportar, se reduzca la carga impositiva, se ajusten los precios de la energía y de los combustibles a nivel

internacional, se otorguen créditos a tasas adecuadas, y que nuestros funcionarios aprendan a negociar con los otros países teniendo claros los objetivos nacionales, y no quepa ninguna duda de que el trabajo aparecerá solo, sin necesidad de ninguna supuesta ley milagrosa.

La ley de reforma laboral que hoy se somete a consideración de la Honorable Cámara con las modificaciones propuestas por el Honorable Senado no es en sí misma ni buena ni mala, pero sí deja traslucir un voluntarismo de sus defensores, que no tendrá resultado práctico alguno si no es acompañada por las medidas indicadas precedentemente.

a) Se insiste sobre la simplificación de la registración laboral, materia sobre la que se ha legislado en múltiples leyes laborales dictadas en los últimos diez años, en especial la ley 24.013. El tema ya no es problema, pero no por las leyes laborales que fijan un solo libro laboral, sino por los decretos y normas que rigen a la ANSeS y a la AFIP. Hoy un trabajador queda incorporado al sistema laboral por la inclusión de su CUIL en la DDJJ de Seguridad Social del empleador. Si no tiene CUIL, la ANSeS lo genera e informa vía Internet. Adviértase que el artículo 32 del proyecto en estudio remite a la ley 24.013, con lo que demuestra palmariamente que la nueva norma es superflua y ya existente.

b) Se insiste sobre ciertas modificaciones al régimen de convenciones colectivas de trabajo, pretendiendo imponer el criterio del nivel menor de negociación sobre el nivel mayor. Quien sostenga que una unidad de negociación a nivel fábrica o establecimiento respeta la paridad paritaria de las partes, desconoce la realidad misma. El empresario cuenta con múltiples posibilidades de persuasión y/o coacción sobre sus trabajadores, delegados de personal y representantes del nivel local, que alteran sustancialmente la paridad. Ni qué decir si a dichas presiones se incorpora la autoridad administrativa local con intereses que pueden ser legítimos para una comunidad donde la fábrica o el establecimiento se asienta, pero que pueden ser adversos a los intereses de los trabajadores que negocian su convenio.

c) Se advierte que al elaborarse el proyecto, durante su tratamiento y a través de los medios, todo parece girar en torno a la representación sindical y futuros conflictos entre sindicatos de distinto grado. Nada se ha dicho sobre la representación empresarial, y es ella tal vez la mayor fuente de futuros conflictos.

El artículo 6º, que propone modificar el artículo 2º de la ley 14.250, ingresa en un terreno que no estaba resuelto ni antes ni se lo hace ahora. La representatividad empresarial siempre ha sido una facultad arbitraria del Ministerio de Trabajo. Atomizarlo para posibilitar múltiples convenios en una misma actividad no es la mejor solución. Bastará que los empresarios de dos localidades, provincias o regiones diferentes no se consideren representados por las cámaras nacionales, regionales

o provinciales del sector, para que logren unidades propias de negociación, con lo cual se multiplicarán las comisiones y los convenios, especulando con que los gremios no podrán actuar en tantas y se abrirán las puertas a cualquier convenio de empresa o regional discutido con representantes locales que tal vez no tengan la experiencia y el conocimiento necesario para debatirlos.

Por ello me opongo expresamente al artículo 16, que propone derogar el primer apartado del artículo 6° de la ley 23.546. Dicho artículo debe ser suprimido porque es la autorización legal a la posible mala fe de ciertos empresarios.

La extensión de los convenios colectivos de trabajo a todos los trabajadores de la actividad es una sabia disposición que protege a los trabajadores de la mala fe de sus empleadores. Si dicha disposición se suprime, se abren las puertas a cualquier maniobra empresaria. Bastará a cualquier empresario que se desafilie de una cámara o que no adhiera a ninguna, para que los convenios colectivos de trabajo le sean inaplicables, con notorio perjuicio para sus trabajadores, los cuales en la mayoría de las fábricas y establecimientos pequeños ni pueden soñar con tener un convenio propio y sólo son protegidos por los convenios mayores.

Sí debo dar mi apoyo al título VI para la instrumentación de un adecuado sistema de inspección de trabajo, en tanto se organice con recursos humanos idóneos y financieros suficientes.

Uno de los mayores problemas argentinos es la ineficiente estructura estatal para hacer cumplir las leyes de la República. Basta ver cómo se reconoce alegremente que la evasión ronda el 50 %, o que un 40 % de los trabajadores está en negro, para darse cuenta de que el problema no son las leyes sino el control de su aplicación. Toda medida que contribuya a superar esa ignominiosa realidad que reflejan las estadísticas debe ser bienvenida.

### 3

#### INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA NOFAL

##### **Opinión de la señora diputada acerca del proyecto de ley de reforma laboral**

*“La reforma laboral favorece la creación de empleo estable y el desarrollo económico del país.”*

La reforma laboral favorece:

1. La promoción del empleo estable y su distribución a lo largo y lo ancho del país.

2. La reinstalación del instituto de la negociación colectiva para generar nuevos y modernos marcos de relaciones laborales.

3. La diversificación y descentralización de la negociación colectiva para que los trabajadores y empresas puedan elegir el ámbito en el cual negociar y puedan reconocer situaciones diferenciadas de desarrollo y productividad.

4. La simplificación de la registración laboral para reducir costos de tramitación (que afectan sobre todo a las pequeñas y medianas empresas) y la mejora de control para combatir el empleo en negro.

A pesar de estos aspectos favorables, el proyecto de reforma laboral ha merecido fuertes críticas en algunos sectores del sindicalismo, e incluso del justicialismo. Se argumenta que la reforma precariza el empleo, que atenta contra el sindicalismo y que impulsa una renegociación a la baja de los salarios.

Dada la importancia del tema, es necesario analizar los principales puntos de la reforma y determinar la procedencia o improcedencia de las críticas.

En primer lugar, la introducción de un período de prueba (título I, artículo 1°) de 3 meses, ampliable a 6 meses por convenio colectivo, con el pago de aportes y contribuciones a la Seguridad Social, baja la incertidumbre y facilita la contratación de trabajadores. En los casos de pequeñas empresas el período de prueba es de 6 meses ampliable hasta doce meses por convenio colectivo, con el pago de aportes y contribuciones. Esto opera en el mismo sentido, tendiendo a aumentar la elasticidad empleo del PBI.

En segundo lugar, la ley propuesta no precariza el empleo pues lo que se promociona e incentiva fiscalmente es el incremento neto de la nómina de trabajadores contratados por tiempo indeterminado a través de una reducción de sus contribuciones a la Seguridad Social (artículo 2°). Esto a diferencia de lo acontecido en la década de 1990 donde el incentivo fiscal recaía sobre el contrato temporario. Es decir, lo que antes se estaba promocionando era la existencia de formas precarias de contratación. En estricto sentido, la nueva ley laboral acaba entonces con la promoción de la precarización del empleo de la década del noventa.

En tercer lugar, la reforma laboral no es antisindical, como algunos aluden. Todo lo contrario al rescatar, reinstalar, y realizar la negociación colectiva como instrumento central para el establecimiento de las relaciones de trabajo, destaca como actor clave de la negociación.

En cuarto lugar, la ley propuesta no facilita la negociación a la baja de los salarios. En este sentido el artículo 28 y el 29 (capítulo 5), establece una doble garantía salarial (por ejemplo, frente al hipotético caso de que de los contratos ultraactivos de 1975 se saliera negociando un nivel inferior:

a) El nuevo convenio de nivel inferior no podrá tener básicos iniciales inferiores a los de las categorías del viejo convenio;

b) Los trabajadores que estaban amparados por el viejo convenio, continuarán por el plazo fijado (dos años) sujetos a todas las condiciones salariales allí establecidas.

Es más, en el mediano plazo, en la medida que la economía argentina transite por un sendero de cre-

cimiento sostenido, la reforma laboral presionará hacia arriba (y no hacia abajo), y permitirá que los aumentos sostenidos de productividad se reflejen en salarios mayores y crecientes.

En efecto, la descentralización de las negociaciones abre la posibilidad que los empleados de una empresa que tengan continuos aumentos de productividad reclamen salarios mayores, evitando, por un lado, que las mayores rentabilidades por aumentos de productividad no se distribuyan de acuerdo a la participación y contribución de los factores en este aumento y, por otro, que los niveles hacia abajo con empresas de menor productividad (igualmente negativo sería que los trabajadores de una empresa sean nivelados hacia arriba con otra mayor productividad, afectando en este caso la fuente de empleo).

En síntesis, desde un punto de vista de mediano plazo y largo plazo, en la medida en que la economía argentina crezca de forma sostenida, la reforma laboral abre la posibilidad de ganar terreno perdido en términos de la participación de la remuneración al trabajo en el ingreso nacional (que ha retrocedido a alrededor de un 30 % actualmente en la Argentina contra un 70 % aproximadamente de participación en las economías capitalistas desarrolladas) y, así revertir el proceso de concentración económica y distribución regresiva del ingreso observado durante los 90.

En el mismo sentido, si bien la reforma laboral por sí misma no genera empleo, facilita la empleabilidad y crea incentivos correctos para la generación de empleo estable en todo el país. En este sentido, la descentralización de la negociación colectiva es un factor clave para facilitar la desconcentración geográfica de la actividad económica y su distribución en todo el país. Asimismo, por esta vía el principio de la descentralización colectiva que la reforma laboral consagra va a permitir contrarrestar la migración de empleo resultante del desvío de inversiones fuera del país, y relocalizar empleos y actividades amenazadas hacia las zonas menos desarrolladas del interior del país.

El país padece una aguda desigualdad en los niveles de desarrollo económico regional, que se expresan en los mercados diferencias existentes en el ingreso per cápita entre las provincias del país. Así, el ingreso per cápita en Buenos Aires/Capital Federal es de aproximadamente u\$s 25.000 por año, que es un nivel similar o superior al de muchas ciudades de Europa o EE.UU., mientras que el ingreso per cápita de Formosa, la provincia de menor ingreso per cápita de la Argentina, es de alrededor de u\$s 2.300 por año, similar al de otras regiones pobres de Latinoamérica.

Para mejorar el nivel de desarrollo de las economías regionales más atrasadas del país se requieren entre otras cosas, del establecimiento de nuevas actividades productivas de bienes y servicios. La

descentralización de las convenciones colectivas de trabajo introduce incentivos correctos en este aspecto. La adaptación de la negociación colectiva a las realidades particulares de cada región, traerá sin dudas beneficios a las economías regionales, sus trabajadores y empresas permitiendo la generación de nuevos y genuinos empleos productivos en el sector privado.

La pobreza en el interior del país se entiende, muchas veces, principalmente como un problema social y las soluciones que se proponen (como los planes Trabajar) se centran en cubrir las acuciantes necesidades sociales de los que no tienen empleo y viven en las zonas más atrasadas. No obstante, el problema de la pobreza tiene también una dimensión económica, específicamente una dimensión de desarrollo económico, tal como lo señalara recientemente monseñor Casaretto. Sin puestos de trabajo y sin crear oportunidades para la inversión y la generación de riqueza, la ayuda social no bastará para producir beneficios duraderos. En este sentido, la descentralización de las negociaciones colectivas crea incentivos correctos para la generación de puestos de trabajo y la inversión en las regiones menos desarrolladas y por esta vía permitirá combatir el flagelo de la pobreza.

Complementariamente, es importante formular un nuevo proyecto de ley de desarrollo regional que estimule la localización de inversiones en las regiones menos desarrolladas o con más altas tasas de desempleo por la vía de promocionar la creación de trabajo o el componente trabajo del valor agregado (no como en el pasado donde el peso de la promoción industrial o regional ha estado puesto siempre en subsidiar el factor capital).

Por último, es necesario señalar que los mencionados efectos positivos de la reforma laboral podrían verse disminuidos por la alta tasa de desocupación existente y retardados si la economía no entra en un proceso virtuoso de crecimiento e inversión. Por tanto, es aconsejable que la reforma laboral sea acompañada con un seguro de desempleo con amplia cobertura de desocupados, a un nivel adecuado. Los beneficios de un seguro de desempleo ampliado superarían su costo fiscal neto (dado que podría instrumentarse en reemplazo de otros programas asistenciales, sustitutos, de forma más auditable y transparente), desparramando importantes efectos directos e indirectos sobre toda la economía.

En conclusión, la reforma laboral introduce incentivos correctos para favorecer un crecimiento del empleo estable en el corto plazo, y para que también, en el mediano y largo plazo, se generen más industrias, empleos y salarios crecientes en un marco de verdadero desarrollo económico federal.

## 4

# INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BRITOS

**Doctrina peronista. Texto de la declaración de los derechos del trabajador proclamados el 24 de febrero de 1947 por el excelentísimo señor presidente de la Nación, general Juan Perón, en solemne acto público**

## DERECHOS DEL TRABAJADOR

El presidente de la Nación Argentina, haciéndose intérprete de los anhelos de justicia social que alienan los pueblos y teniendo en cuenta que los derechos derivados del trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales, inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana, cuyo desconocimiento o agravio es causa de antagonismos, luchas y malestares sociales, considera necesario y oportuno enunciarlos mediante una declaración expresa, a fin de que, en el presente y en el futuro, sirva de norma para orientar la acción de los individuos y de los poderes públicos, dirigida a elevar la cultura social, dignificar el trabajo y humanizar el capital, como la mejor forma de establecer el equilibrio entre las fuerzas concurrentes de la economía y de afianzar, en un nuevo ordenamiento jurídico, los principios que inspiran la legislación social.

Por ello, y de acuerdo con estos propósitos y fines, formula solemnemente la siguiente:

## DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

### I

#### *Derecho de trabajar*

El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general; de ahí que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite.

### II

#### *Derecho a una retribución justa*

Siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano, la comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado.

### III

#### *Derecho a la capacitación*

El mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los valores del espíritu imponen la ne-

cesidad de propiciar la elevación de la cultura y de la aptitud profesional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento, e incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo individual proporcionando los medios para que, en igualdad de oportunidades, todo individuo pueda ejercitar el derecho a aprender y perfeccionarse.

### IV

#### *Derecho a condiciones dignas de trabajo*

La consideración debida al ser humano, la importancia que el trabajo reviste como función social y el respeto recíproco entre los factores concurrentes de la producción, consagran el derecho de los individuos a exigir condiciones dignas y justas para el desarrollo de su actividad y la obligación de la sociedad de velar por la estricta observancia de los preceptos que las instituyen y reglamentan.

### V

#### *Derecho a la preservación de la salud*

El cuidado de la salud física y moral de los individuos debe ser una preocupación primordial y constante de la sociedad, a la que corresponde velar para que el régimen de trabajo reúna los requisitos adecuados de higiene y seguridad, no exceda las posibilidades normales del esfuerzo y posibilite la debida oportunidad de recuperación por el reposo.

### VI

#### *Derecho al bienestar*

El derecho de los trabajadores al bienestar, cuya expresión mínima se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda, indumentaria y alimentación adecuadas, de satisfacer sin angustias sus necesidades y las de sus familias en forma que les permita trabajar con satisfacción, descansar libres de preocupaciones y gozar mesuradamente de expansiones espirituales y materiales, impone la necesidad social de elevar el nivel de vida y de trabajo con los recursos directos e indirectos que permita el desenvolvimiento económico.

### VII

#### *Derecho a la seguridad social*

El derecho de los individuos a ser amparados en los casos de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo, promueve la obligación de la sociedad de tomar unilateralmente a su cargo las prestaciones correspondientes o de promover regímenes de mutua obligatoria destinados, unos y otros, a cubrir o complementar las insuficiencias o inaptitudes propias de ciertos períodos de la vida o las que resulten de infortunios provenientes de riesgos eventuales.

## VIII

*Derecho a la protección de su familia*

La protección de la familia responde a un natural designio del individuo desde que en ella generan sus más elevados sentimientos afectivos y todo empeño tendiente a su bienestar debe ser estimulado y favorecido por la comunidad como el medio más indicado de propender al mejoramiento del género humano y a la consolidación de principios espirituales y morales que constituyen la esencia de la convivencia social.

## IX

*Derecho al mejoramiento económico*

La capacidad productora y el empeño de superación hallan un natural incentivo en las posibilidades de mejoramiento económico, por lo que la sociedad debe apoyar y favorecer las iniciativas de los individuos tendientes a ese fin y estimular la formación y utilización de capitales en cuanto constituyen elementos activos de la producción y contribuyan a la prosperidad general.

## X

*Derecho a la defensa de los intereses profesionales*

El derecho de agremiarse libremente y de participar en otras actividades lícitas tendientes a la defensa de los intereses profesionales, constituyen atribuciones esenciales de los trabajadores que la sociedad debe respetar y proteger, asegurando su libre ejercicio y reprimiendo todo acto que pueda dificultarlo o impedirlo.

## 5

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR  
DIPUTADO GORVEIN**Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley de reforma laboral**

Con profunda atención he seguido el tratamiento de esta reforma laboral y hoy, en momentos previos a su aprobación, la cual se va a lograr aplicando la "dictadura de los números", utilizando un calificativo ampliamente mencionado en este recinto, tengo una sensación de frustración al recordar los hechos de dominio público que acompañaron las distintas etapas legislativas y la impresión de que se está legislando sobre algo para muchos argentinos inexistente e inalcanzable: el trabajo.

Esta reforma laboral sindical pretende bajar los salarios aunque no expresamente figure en el texto, hecho que violaría normas constitucionales, pretende quebrar las convenciones colectivas, haciéndolas ineficaces ante los arreglos privados entre los patrones y empleados, industria por indus-

tria, comercio por comercio. Con esto se debilita, aún más, la parte más débil de la relación laboral hasta convertirla en un juguete del capital; pretende la rescisión contractual sin preaviso ni obligación de indemnización; minimiza hasta lo increíble el valor de la vida de un obrero, llevándonos a concluir que quien es el dueño del capital es el dueño de la vida del obrero, terminando por esclavizarlo. El paso siguiente es el avasallamiento industrial y comercial, desapareciendo la pequeña y mediana empresa, y de nuestro país, desde el punto de vista laboral, será cada vez más parecido a Singapur, Hong Kong o Taiwán. En estos lugares nos muestran grandes avenidas, importantes edificios, majestuosos hoteles, que son de las empresas que lucran con los trabajadores, trabajadores que tienen una jornada laboral de 14 horas, no tienen vacaciones ni obra social y no ganan más de 50 dólares al mes.

El tiempo dará la razón a quienes opinamos que esta ley no va a traer más trabajo, va a traer más gente trabajando, pero con un salario de hambre, donde antes había un obrero que ganaba trescientos pesos (\$ 300), con esta ley, en poco tiempo más, habrá tres obreros que ganen cien pesos (\$ 100) al mes. Van a existir más trabajadores, pero ninguno vivirá dignamente.

Por lo antes expuesto, adelanto mi voto negativo al proyecto en tratamiento.

## 6

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR  
DIPUTADO GALLAND**Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre reforma laboral**

Expreso mi preocupación acerca del artículo 4º por la posibilidad de colisión con la ley 20.337, donde es el INACYM el órgano de fiscalización de las cooperativas de trabajo.

Quiero preservar la defensa de las cooperativas de trabajo en su verdadera esencia y no de aquellas entidades que, en desmedro del cooperativismo, sólo aspiran a evadir las leyes previsionales.

Por ello me parece fundamental que en la reglamentación del citado artículo se convoque a participar a los organismos que verdaderamente representan a los cooperativistas. En mi provincia, la Federación de Cooperativas de Trabajo de la provincia de Buenos Aires representa cabalmente los intereses del auténtico cooperativismo, y estamos esperando ser convocados.

Los auténticos cooperativistas no crean una cooperativa para una duración efímera o eventual.

Creo en la necesidad de evitar el fraude laboral tras falsas cooperativas.

Realizada esta aclaración, voto afirmativamente el proyecto de ley de reforma laboral ya que por técnica legislativa solamente podemos hacerlo así.